



GOBIERNO DE
MÉXICO



NUEVO
ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

DIRECCIÓN JURÍDICA
Subdirección de lo Consultivo

OFICIO No. 600.605.SDC/0298/2024

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2024

Asunto: Atención a la solicitud de
información No. 330017124000588

MTRA. LAURA LUISA DORANTES SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EN EL ISSSTE
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 6º, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, cuarto párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en estricto ámbito de competencia de la Dirección Jurídica, con el propósito de atender la solicitud con el número 330017124000588, reactivada en la plataforma GISA el 16 de febrero de 2024, misma que se trae a colación para mejor proveer:

"Por este medio me permito, distraer su atención para solicitar información referente a cuántas demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentran en cuentas individuales, del año 2021 al 2023, de esas mismas cuántas han sido resueltas favorablemente a su petición, y proporcionar 10 demandas y 10 resoluciones por año solicitado, debidamente protegiendo los datos personales de los demandantes. Lo anterior para fines educativos. Agradezco de antemano la atención brindada a la presente."
(sic)

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.2, función 16 del Manual de Organización General del Instituto, así como en los artículos 3, 6 y 130 párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, 8, y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito dar contestación a la solicitud de información antes referida, en el sentido de informar e interpretar de la manera más amplia el principio de máxima publicidad, que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección Jurídica, por lo cual se manifiesta lo siguiente:

Respecto a la solicitud consistente en *"referente a cuántas demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentran en cuentas individuales, del año 2021 al 2023, de esas mismas cuántas han sido resueltas favorablemente a su petición"*, se informa que del periodo señalado, se localizó el registro de **3,272** demandas de nulidad, de las cuales, **1,671** cuentan con sentencias en las que se condena al cambio de registro a Décimo Transitorio.

Ahora bien, respecto a la petición consistente en *"...proporcionar 10 demandas y 10 resoluciones por año solicitado, debidamente protegiendo los datos personales de los demandantes"*, se anexa dispositivo CD que contiene documentación consistente en las demandas requerida respecto a los años 2021 y 2022, en la que fue clasificada la información considerada como

Jesús García Corona #140 Piso 9, ala "B" Col. Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06350. Tel: (55) 5140 9617 - www.gob.mx/issste





DIRECCIÓN JURÍDICA
Subdirección de lo Consultivo

confidencial, en términos del artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se somete a valoración del Comité de Transparencia, a fin de que confirme la versión pública de los documentos antes referidos.

Ahora bien, se hace mención que las versiones públicas de las resoluciones correspondientes a los años 2021 y 2022, se encuentran en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ingresando a la siguiente página:

<http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml>

Para visualizar la resolución solicitada, deberá ingresar el numero de juicio en el recuadro que señala "Buscar texto en documento", tal y como se observa en la imagen que se inserta a continuación:

Consulta de Sentencias Públicas

Al respecto, a fin de coadyuvar para la atención de la solicitud de información que nos ocupa, esta Dirección Jurídica brinda el numero de expediente con el cual se puede tener acceso a las mismas, siendo los siguientes:

No.	Sentencias 2021	Sentencias 2022
1	2257/21-02-01-1	930/22-07-02-2
2	19/21-02-01-1	729/22-07-01-3
3	458/21-02-01-6	840/22-07-01-9
4	2379/21-17-09-2	615/22-02-01-8
5	838/21-02-01-3	3650/22-07-01-5
6	4923/21-07-01-3	5008/22-07-03-7
7	15489/21-17-12-6	5997/22-07-02-1
8	2851/21-04-01-7	2302/22-02-01-8
9	4923/21-07-01-3	4206/22-07-03-1
10	6841/21-07-01-6	611/22-04-01-8

Por otra parte, en cuanto a la documentación correspondiente al año 2023, se informa que no se cuenta con algún asunto que haya causado estado, por lo cual, esta área legal se encuentra impedida para proporcionar la información requerida, toda vez que el brindar la documentación



requerida vulneraría la conducción de expedientes judiciales; por tal razón, se somete a consideración del Comité de Transparencia la clasificación íntegra con carácter de reservada de la información y documentación solicitada que se encuentra en posesión del sujeto obligado y que guarda relación con lo solicitado por el peticionario, por un periodo de **5 años**, en el marco del fundamento y motivación que se expone a continuación:

En el caso que nos ocupa, se considera que tiene lugar la actualización de las hipótesis previstas en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señalan lo siguiente:

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
(...)" (Sic)

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
(...)" (Sic)

Los artículos antes referidos contemplan los supuestos para clasificar como reservada la información que se encuentre en posesión de los sujetos obligados; entre las cuales se señalan, cuando su publicación *"afecte los derechos del debido proceso"*; y cuando su publicación *"vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado"*, supuestos que este sujeto obligado considera que son aplicables al presente asunto por lo siguiente:

Primeramente, se debe entender que los datos solicitados, contienen información de diversos juicios que no han causado estado; por lo que su publicación afectaría el derecho del debido proceso de las partes involucradas, es decir, del gobernado y de este sujeto obligado, por lo que dicha información no debe ser conocida antes de su presentación en los procesos.

Así, la publicación de la información solicitada por el peticionario puede vulnerar la conducción de los juicios y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que están a cargo del sujeto obligado, esto debido a que son asuntos que se encuentran en trámite, es decir, que no



han sido resueltos y/o no han causado estado.

Apoyándose lo anterior, con los numerales Vigésimo Noveno y Trigésimo del "ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016; en virtud de que las comunicaciones efectuadas a través de los oficios solicitados incluyen información que conforman actuaciones adoptadas para llevar a cabo la debida gestión del procedimiento judiciales, señalándose que, mientras no se haya emitido la resolución definitiva, el otorgar la documentación requerida podría desfavorecer los resultados que se esperan y por tanto los interés del instituto.

Los preceptos antes referidos establecen los siguiente:

"ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;*
- II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;*
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y*
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.*

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y*
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.*

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

- 1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de*



audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada."

En virtud de lo anterior, como ya se hizo mención, resultan aplicables al presente asunto los supuestos de reserva previstos en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo tanto, se procede a la aplicación de la prueba de daño prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala lo siguiente:

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; y

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda." (sic).

PRUEBA DE DAÑO.

De conformidad con la fracción I del artículo 104 de la Ley General de la materia, se considera que la divulgación de la información solicitada conlleva un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que:

La divulgación de la información solicitada representa una vulneración irreversible en la debida conducción de cada uno de los juicios que se encuentran a cargo del sujeto obligado, ya que contienen diligencias o actuaciones de los asuntos se encuentran en trámite, es decir, las autoridades jurisdiccionales que conocen de cada uno de ellos no han emitido la resolución definitiva; y en consecuencia, aún no se ha declarado su firmeza; declaración que resulta fundamental para asegurar que dichas determinaciones no podrán ser modificadas o revocadas.

Asimismo, la difusión de la información solicitada permitiría que la contraparte tuviera acceso a la información contenida en ellos, la cual es presentada ante los órganos jurisdiccionales competentes, como parte de la defensa de este sujeto obligado, quien se encuentra involucrado en cada uno de los juicios.

Por otra parte, la difusión de la información podría comprometer la imparcialidad del juzgador, lo cual, conllevaría a la afectación de la esfera personal y jurídica del gobernado, así como, la transgresión al principio constitucional del debido proceso, porque la información con la que se cuenta al momento, al estar bajo el estudio del órgano jurisdiccional que conoce de cada juicio, puede presuponer indicios en contra del interesado e incluso llegar a perjudicarlo en su ámbito personal.



Resulta aplicable a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial, con número de registro **2005716**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del contenido siguiente:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."

De acuerdo con la tesis jurisprudencial antes citada, el derecho al debido proceso está conformado por las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento jurisdiccional, identificadas también como formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se enumeran a continuación:

1. La notificación del inicio del procedimiento;
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
3. La oportunidad de alegar; y,
4. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y su impugnación.



DIRECCIÓN JURÍDICA
Subdirección de lo Consultivo

Dichas formalidades esenciales del procedimiento, resultan ser un derecho que toda persona tiene para ejercer su defensa antes de que las autoridades jurisdiccionales competentes modifiquen su esfera jurídica definitivamente.

En ese entendido, al revelarse los datos solicitados por el peticionario, se estarían violentando las formalidades esenciales del procedimiento que conforman el debido proceso; toda vez que, se insiste, la publicación de la información solicitada puede presuponer indicios en contra del gobernado y perjudicarlo en su esfera jurídica.

Por tal, la finalidad de la reserva de la información es el lograr de manera eficaz el mantenimiento de los procesos jurisdiccionales en todas sus etapas, específicamente por cuanto a la sana e imparcial integración de los expedientes que guardan relación con cada uno de los juicios que están a cargo del sujeto obligado, desde su apertura hasta su total solución (que haya causado estado); además que el contenido de los asuntos únicamente deben ser de acceso para las partes que están involucradas en cada uno de los asuntos, como lo son, el gobernado; este sujeto obligado; y del juzgador, quien debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, evitando cualquier injerencia externa que por mínima que sea suponga una alteración a ese esquema y a la objetividad que rige su actuación.

Por tanto, de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 104 de la citada Ley General, el riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda, pues el contenido de los documentos emitidos por el sujeto obligado podría utilizarse para entorpecer u obstruir el trámite de dichos juicios, así como, de la emisión de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicten.

Aunado a lo anterior, las autoridades jurisdiccionales que conocen de cada uno de los juicios que se encuentran a cargo del sujeto obligado pueden ser sujetas de presiones indebidas por parte de terceros ajenos al procedimiento, pudiendo comprometer o condicionar formal y materialmente el resultado de su actuación; por lo que deben clasificarse en su totalidad los datos solicitados, tomando en cuenta que se considera reservada la información relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio, que al divulgar la información causaría un daño a la seguridad jurídica del gobernado, y para evitar con ello la violación al debido proceso, en detrimento de la actuación de los jueces o magistrados en un marco de libertad, objetividad e imparcialidad.

Por lo que, de conformidad con la fracción III, del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en tanto que, el principio de proporcionalidad establece la obligación del sujeto obligado de tratar sólo aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las cuales se obtuvieron; y la reserva solicitada tiene por objeto salvaguardar la información contenida en los oficios requeridos, ya que contienen datos personales sensibles, que de ser divulgados podrían conllevar un riesgo grave en la esfera más íntima de su titular.



DIRECCIÓN JURÍDICA
Subdirección de lo Consultivo

Bajo ese orden de ideas, resulta procedente la clasificación de la información solicitada, toda vez que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se acreditan los supuestos señalados en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo al hecho de que la publicación de los documentos que nos ocupan, representa un riesgo real, demostrable e identificable; el cual supera el interés público general de que se difunda; y la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARLOS ENRIQUE ROSALES GUEVARA
ENLACE DE TRANSPARENCIA Y SUBDIRECTOR DE LO CONSULTIVO

c.c.p. Mtra. Verónica Alejandra Curiel Sandoval.- Directora Jurídica.- Para su superior conocimiento. Presente.
KIB/DLC

Jesús García Corona #150 Piso 9, ala "B" Col. Biscaya, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06550. Tel: (55) 5140 5617 www.gob.mx/issste

